

C.A. de Santiago

Santiago, nueve de mayo de dos mil veintitrés.

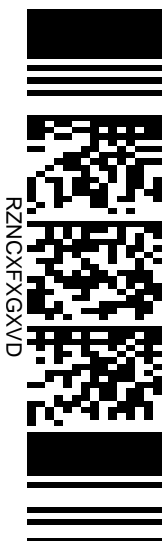
Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción del considerando décimo noveno, que se suprime.

Y teniendo en su lugar y, además, presente:

1º) Por sentencia de veintinueve de abril del año en curso, dictada por la ministra en visita extraordinaria, Sra. Paola Plaza González, en la causa Rol N° 660-2011, se condenó a Luis Alberto Castillo González a la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales correspondientes y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de secuestro calificado de Javier Alberto Salinas Velásquez, ocurrido en esta ciudad entre el 28 y el 30 de junio de 1974, sin concederle beneficios alternativos de la Ley N° 18.216, debiendo cumplir la pena efectivamente y reconociéndole como abono 3 días que permaneció privado de libertad en esta causa, entre 26 y el 28 de noviembre de 2019.

Contra esa sentencia la defensa del sentenciado Castillo González interpuso recurso de apelación, solicitando -en síntesis- que se revoque ese fallo, absolviendo a su defendido; en subsidio, en el evento improbable que hubo una conducta punible, esta corresponde a un delito común, por lo que procede declarar la prescripción de la acción penal, absolviendo a su representado o, de resultar condenado, se le conceda el beneficio del artículo 103 del Código Penal, del artículo 11 N° 9 y en definitiva se rebaje el quantum de la pena a prisión en su grado máximo, concediendo el beneficio de remisión condicional de la pena.



2º) Los fundamentos de la apelación, en síntesis, son los siguientes:

a.- En primer lugar plantea que, en su concepto, las pericias al esqueleto del occiso probaron la inexistencia de terceros en su deceso, aunque dicho examen arrojó lo que se denomina “hallazgos médico legales”, consistente en pequeñas fracturas provocadas peri mortem, develando también defectos o patologías que no fueron debidamente singularizadas ni explicitadas por él o por peritos, lo que su parte hizo ver cuando contestó la acusación, sin que se efectuaran las diligencias pertinentes para esclarecer esa tipo de lesiones. Insiste que el informe pericial dejó en evidencia la existencia de tales lesiones, sin que hubiese un informe científico para explicarlas. Alude a un gráfico presentado por su parte al contestar la acusación, de lo cual se puede inferir que las lesiones óseas que fundamentan el “grave daño” solo merecen calificarse como una concausa médico legal, por lo que la juez debió calificarlas como insuficientes o no existentes, absolviendo a su representado porque no hay vestigio alguno que él las haya causado;

b.- Luego, refuta la calificación del delito como de lesa humanidad, pues en su concepto es un delito de homicidio simple. Señala, en síntesis que el fallo, en este aspecto, es “espurio”, especialmente en los considerandos quinto, sexto y séptimo, dirigiendo expresiones odiosas contra el régimen militar, en un proceso que “eufemísticamente” se denomina de Derechos Humanos. En seguida, relata los hechos, que -a su juicio- solo dan una cuenta de una detención practicada porque el occiso estaba causando desorden y que se suicidó en su camarote metálico, al interior de uno de los boxes del cuartel.

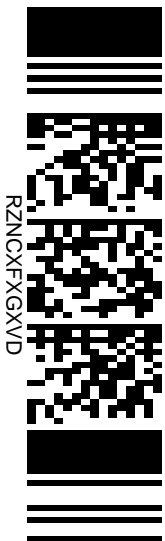


3º) Por su parte, evacuando el informe de rigor, la Fiscal Judicial, Sra. Macarena Troncoso López, en lo medular, sostiene, en cuanto al hecho punible, que se pueden distinguir dos momentos, siendo el primero una detención irregular en la vía pública de la víctima y su traslado al regimiento militar, donde es entregado a los guardias del lugar y el segundo cuando -encontrándose ilegalmente en custodia en ese recinto militar- es objeto de graves apremios físicos y luego muere en el lugar a causa de “asfixia por ahorcamiento”. Descarta los cuestionamientos de la defensa, relativos a una teoría alternativa en la forma de acaecer los hechos, por cuanto no aportó medios de prueba que permita sustentarlas.

También comparte la calificación jurídica en la de un secuestro calificado causando grave daño a la persona o intereses de la víctima, según la redacción del artículo 141 del Código Penal, vigente a la fecha de los hechos.

En cuanto a la participación, distinguiendo los dos momentos antes referidos, estima que si bien hay dolo en la detención ilegal, en el segundo solo puede atribuirse culpa al acusado, pues no hay antecedentes que permitan sugerir siquiera la existencia de un dolo eventual, por lo que al calificar el delito por el resultado, la muerte se produce a consecuencia de la detención, lo que incide en la pena aplicable.

Concuerda con la sentenciadora en lo atinente al rechazo de la prescripción penal, pero discrepa en lo relativo a la media prescripción, pues aquello no está prohibido por los Tratados Internacionales, aunque considera que debe evaluarse en cada caso, por el principio de proporcionalidad. En suma, en la especie estima no



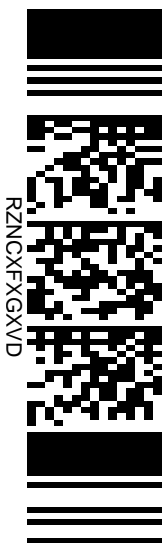
hacer uso de esa facultad, a fin de resguardar dicho principio, en orden al carácter de ser un delito de lesa humanidad.

Disiente del rechazo de la atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento de los hechos, pues en su opinión esta minorante se encuentra acreditada.

Por último, en cuanto a la determinación de la pena, manteniendo la calificación jurídica, así como la participación del acusado, y con la atenuante antes referida, que estima debe acogerse, la sanción puede rebajarse en un grado, motivo por el cual la pena a imponer debería ser tres años y un día de presidio menor en su grado mínimo, más accesorias legales correspondientes, concluyendo que la sentencia debería confirmarse con la declaración antedicha.

4º) En lo que concierne al primer aspecto de la apelación, esto es la errada valoración de la prueba en lo que respecta al informe pericial, en aquella parte que se constataron defectos o patologías que no fueron debidamente singularizadas ni explicitadas por él o por peritos, lo que permite restarle mérito a la conclusión de que las lesiones óseas peri mortem fueron provocadas durante el encierro de la víctima, lo cierto es que teniendo la defensa oportunidad en el plenario para verificar esos asertos no aportó prueba alguna en ese sentido, por lo que esa tesis alternativa no tiene respaldo crediticio para ser considerada.

Aún más, al contestar la acusación, la defensa no cumplió con lo previsto en el artículo 450 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto a proponer como prueba el o los peritos que estimara pertinentes, para dilucidar la situación que plantea, limitándose en el cuerpo de la contestación a formular sus propias apreciaciones sobre



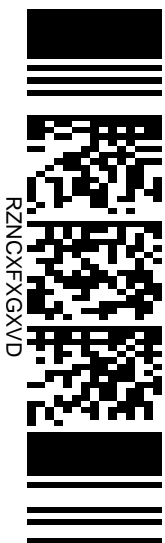
la forma en que acaecieron los hechos, incorporando gráficos y croquis propios de la actividad pericial, lo que no se condice con la forma y oportunidad de rendir la prueba.

En consecuencia, lo aseverado por la defensa en este punto carece de todo fundamento, pues no corresponde al defensor constituirse en perito, ya que para ese efecto debió solicitar la pertinente probanza, en la oportunidad procesal respectiva.

5°) Del mismo modo, el reproche de la defensa en cuanto a que su representado fue sancionado por un delito diverso al que fue acusado, toda vez que la acusación judicial se le atribuyó participación como cómplice de un delito de homicidio simple y fue condenado como autor de un delito de secuestro calificado, causando grave daño, insinuando una infracción al debido proceso, tampoco puede prosperar esa alegación, pues no existe tal irregularidad, desde que tanto en la acusación particular de la AFEP, a fojas 1.742, como en la del Programa de Derechos Humanos, a fojas 1.758, ambos querellantes –discrepando de la acusación judicial- pidieron que el acusado fuera sancionado como autor de secuestro calificado causando grave daño, conforme al artículo 141 del Código Penal.

De este modo, en caso alguno la sentencia excede el margen de su competencia y da cumplimiento a lo previsto en el artículo 507 del Código de Procedimiento Penal, sin incurrir en el vicio contemplado en el artículo 541 N° 10 del mismo cuerpo normativo, toda vez que los acusadores particulares habían solicitado al Tribunal de Primer grado modificar la calificación jurídica de los hechos, lo que, por ende, formaba parte de la controversia a resolver.

6°) Seguidamente, en lo relativo a que el delito investigado es común y no de lesa humanidad, disiente esta Corte de esa

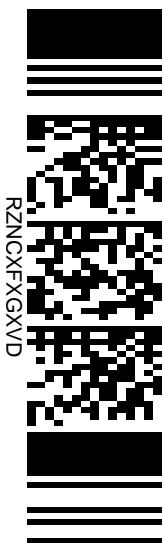


apreciación, compartiendo lo razonado en el fallo de primer grado, en los considerandos quinto, sexto y séptimo, por cuanto el hecho, en síntesis, consistió en la detención ilegal de una persona en un recinto militar quien fue golpeado repetidamente durante su encierro, omitida esa circunstancia tanto en la autopsia como en el certificado de defunción, lo que configura un crimen de lesa humanidad, pues la acción dolosa de agentes del Estado se efectúa mientras mantienen retenido a un individuo contra su voluntad, en tiempo de represión de los disidentes al régimen.

7º) Luego, al no tratarse de un delito común, sino de un delito de lesa humanidad, no resulta aplicable, en concepto de esta Corte la prescripción de la acción penal como tampoco la minorante especial del artículo 103 del Código Penal, como acertadamente lo razona el fallo impugnado, en su motivo décimo cuarto.

8º) En cuanto a la atenuante de haber colaborado sustancialmente en el esclarecimiento de los hechos, coincide este Tribunal de Alzada, con lo manifestado por la Sra. Fiscal Judicial, en cuanto a que concurre dicha modificatoria, toda vez que, atendido el tiempo transcurrido, al reconocer el acusado que él participó en la detención de la víctima, incorporó en la investigación un dato relevante para acreditar su participación en los hechos, por lo que esa atenuante merece ser reconocida en su favor.

9º) Así, concurriendo dos minorantes y ninguna agravante la pena debe ser rebajada en un grado, desde el tramo inferior, alcanzando la sanción el rango de presidio menor en su grado máximo, regulando su cuantía conforme a la mayor extensión del mal causado, que en el presente caso se tradujo en la muerte de la víctima.



10°) Respecto de las demás consideraciones del Ministerio Público Judicial, en particular lo relativo a que el acusado Castillo González solo merece ser castigado a título de dolo en el resultado del delito de secuestro calificado, en concurso con la detención ilegal, no comparte esta Corte ese predicamento, desde que la detención ilegal ha sido absorbida por consunción por el delito de mayor gravedad -esto es el secuestro calificado causando grave daño- y porque, además, con lo razonado por la sentenciadora en el motivo undécimo del fallo en análisis, más los literales b), e), g), j), k), l), m) y n) del considerando décimo hay un cúmulo de presunciones judiciales que permiten inferir que al acusado Castillo González sí le estaba asignada en ese período la custodia de los detenidos, pues pertenecía a la Sección II del Regimiento Tacna, y luego pasó a formar parte del Departamento II: Inteligencia. Así lo mencionan y se desprende de los testimonios y documentos, antes referidos.

De lo anterior, entonces, el secuestro calificado causando grave daño a la persona de la víctima no puede menos que atribuirse al acusado Luis Castillo González, en calidad de autor, actuando con dolo eventual, pues de todos esos antecedentes no puede menos que colegirse que él supo de los apremios y golpiza que sufrió la víctima durante su cautiverio ilegal, de modo tal que la participación dolosa en dicho ilícito está suficientemente comprobada.

11°) Dado el rango de la pena que será impuesta al acusado, no se le aplicará el beneficio de la libertad vigilada, dado que el informe presentencial para este efecto es desfavorable, como se colige a fojas 1.802 y siguientes, ya que presenta contra indicadores para ese beneficio, detallados a fojas 1.806.



12°) A mayor abundamiento, aun cuando el procesado Luis Castillo González no ha sido condenado antes por pena o simple delito, no procede concederle el beneficio alternativo de la libertad vigilada, prevista en el artículo 15 de la Ley Nro. 18.216, debiendo cumplir la pena que se le ha impuesto en forma efectiva, en el centro de reclusión que corresponda, atendido el móvil, naturaleza y gravedad del delito por el cual ha sido sancionado, esto es un secuestro calificado causando grave daño, perpetrado por agentes del Estado, ilícito que debe ser calificado como un crimen de *lesa humanidad*, como ya antes ya se indicó.

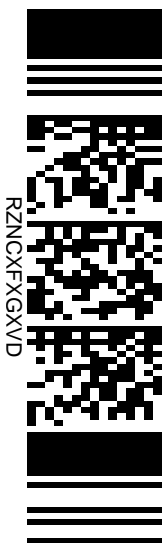
Lo anterior se desprende de los siguientes antecedentes: **a)** Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 9 de junio de 1994, en Belém do Pará, Brasil, ratificada por nuestro país, cuyo texto fue promulgado por Decreto N° 12, de 27 de enero de 2010, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el D.O. de 24 de febrero de 2010; **b)** Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, en Nueva York, Estados Unidos de América, también ratificado por nuestro país, cuyo texto promulgatorio emana del Decreto N° 280, de 10 de diciembre del año 2010, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el D.O. de 16 de abril de 2011 y **c)** Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1992, en Nueva York, Estados Unidos de América, mediante resolución 47/133, instrumento



internacional que aparece expresamente citado en el Preámbulo de la Convención Internacional, referida en la letra precedente.

De la preceptiva precitada, se puede inferir que estos delitos deben ser castigados en forma ejemplar y proporcional a la gravedad del bien jurídico que han lesionado, puesto que afectan a toda la comunidad internacional, rubricado en los instrumentos que se han citado; de aquello se deriva que, al haber ratificado sin reservas el Estado de Chile las Convenciones Interamericana e Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, y ponderando al momento de dictarse la sentencia la plausibilidad de conceder beneficios alternativos de la pena al mentado acusado, en la especie no se hará uso de esa facultad, razón por lo que el sentenciado deben cumplir la pena en forma efectiva.

Por los fundamentos anteriores, más lo previsto en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos el 9 de junio de 1994, en Belém do Pará, Brasil; la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, en Nueva York, Estados Unidos de América; la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 1992, en Nueva York, Estados Unidos de América; artículo 141 del Código Penal; artículos 450, 488, 507, 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, se **confirma** la sentencia apelada de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintidós, que rola de fojas 1.893 a fojas 1.963, **con declaración** que



se reduce la condena impuesta al sentenciado Luis Alberto Castillo González a la de **cuatro años** de presidio menor en su grado máximo, accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor del delito de secuestro calificado de Javier Alberto Salinas Velázquez, ocurrido en esta ciudad entre el 28 y 30 de junio de 1974.

Atendido lo razonado en los motivos **11º)** y **12º)** de esta sentencia, no se le concede al sentenciado algún beneficio alternativo de la pena, por lo que deberá cumplir la pena impuesta en forma efectiva, en el centro penitenciario que corresponda, reconociéndose como abono para su cumplimiento los 3 días que indica la sentencia de primer grado.

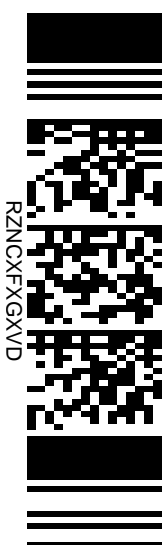
Regístrese y devuélvase, con sus agregados.

Redacción del ministro señor Tomás Gray.

NºPenal-3017-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señora Graciela Gomez Quitral, señor Tomás Gray Gariazzo y el Abogado Integrante señor Joel Arturo González Castillo. No firma el abogado integrante señor de Gonzalez Castillo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones.





Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por los Ministros (as) Graciela Gomez Q., Tomas Gray G. Santiago, nueve de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a nueve de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2023, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>